

Quito, D. M., 30 de mayo de 2013

SENTENCIA N.º 035-13-SCN-CC

CASO N.º 0604-12-CN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

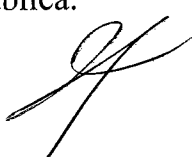
Resumen de admisibilidad

La Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante providencia del 1 de septiembre de 2012 resolvió suspender la sustanciación del juicio penal N.º 2012-0234, seguido por el delito de asociación ilícita en contra del señor Carlos Patricio Aldaz Flores y otros, disponiendo que se remita el proceso en consulta de constitucionalidad, a fin de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo innumerado cuarto, segundo inciso, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General el 4 de octubre de 2012, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

Con oficio N.º 0794-CC-SSG-2012, la Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, en atención al artículo 81 y Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, remitió la presente causa al juez constitucional Patricio Herrera Betancourt, a fin de que continúe con la sustanciación correspondiente.

El 6 de noviembre de 2012, se posesionan ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.



El 30 de noviembre de 2012, a través del memorando N.º 009-CCE-SG-SUS-2012, el secretario general de la Corte Constitucional, remitió la causa N.º 0604-12-CN, a la jueza Ruth Seni Pinoargote, de conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2012.

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2012, la jueza constitucional Ruth Seni Pinoargote avocó conocimiento de la presente consulta de constitucionalidad, disponiendo que se notifique con el contenido de la providencia en referencia. (Fojas 09 del expediente constitucional).

Norma cuya constitucionalidad se consulta

Los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, consultan a la Corte Constitucional, respecto de la constitucionalidad del artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial que expresa: “A la Fiscalía General del Estado le corresponde: (...) 3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria”.

Descripción de los hechos relevantes de la consulta

La presente consulta de constitucionalidad de norma tiene como antecedente el proceso N.º 2012-0234, seguido por el delito de asociación ilícita en contra del señor Carlos Patricio Aldaz Flores y otros, en el cual, se dictó sentencia el 7 de junio de 2012 por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, condenando a los procesados en la causa antes referida.

Frente a este hecho, el señor Carlos Patricio Aldaz Flores y otros, interpusieron un “recurso de nulidad de la sentencia (...) dictada en su contra el 7 de junio de 2012”; recurso que fue conocido por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada por los jueces Carmen Zambrano Semblantes, Patricio Navarrete Sotomayor y Eduardo Ochoa Chiriboga, quienes en virtud de lo expuesto en el artículo 428 de la Constitución de la República formulan la presente consulta de norma.

En lo principal, los jueces exponen los argumentos vertidos por el señor Carlos Patricio Aldaz y otros, y aquellos manifestados por el agente fiscal de Pichincha durante el desarrollo del recurso de nulidad.

Los primeros indican que se ha vulnerado el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76 numeral 7 literales **a** y **d** de la Constitución de la República, porque “el



Agente Fiscal de Pichincha no habría notificado a los sospechosos con la orden de allanamiento, incautación y detención con fines investigativos, expedida durante la indagación previa, conforme lo establece el artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

Por su parte, el agente fiscal de Pichincha ha manifestado “la imposibilidad de notificación debido a que el objetivo de la indagación es establecer presunciones de existencia de un delito, y recién cuando esto se vislumbra como probable se debe señalar a los presuntos responsables. Para llegar a ello, hay que investigar (...) si se conoce al sospechoso se le informa de la investigación pero no de las actuaciones tendientes a asegurar las evidencias”.

Con este escenario, los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, exponen un análisis de los artículos 9 y 70 del Código de Procedimiento Penal con el artículo 283 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial y concluyen que “el mencionado numeral tercero del Art. 282 ‘COFJ’ crea situaciones anacrónicas que pueden llegar a vulnerar la correcta administración de justicia, así como los derechos del ofendido o víctima”.

De esta forma, los jueces consultantes, amparados en varias normas constitucionales y haciendo referencia a algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalan que un interviniente en una investigación penal tiene derecho a que se le haga conocer los hechos sobre los que versa dicha investigación; a contar con un abogado que le patrocine antes de su primera declaración; a ser informado sobre los cargos que pesan sobre él; y a presentar evidencias o pruebas de descargo con sujeción a las restricciones de acceso y notificación, necesarias para encontrar la verdad, impidiendo la destrucción u ocultamiento de evidencias y garantizando la eficacia de la administración de justicia, lo cual en su criterio, podría no alcanzarse, de mantener en vigencia la norma cuya constitucionalidad se consulta.

Petición de consulta de constitucionalidad

Con lo expuesto, los doctores Carmen Zambrano Semblantes, Patricio Navarrete Sotomayor y Eduardo Ochoa Chiriboga, jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, creen oportuno remitir el expediente de la causa N.º 2012-0234 a la Corte Constitucional a fin de que esta se “pronuncie sobre la inconstitucionalidad” del artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dicha norma jurídica vulneraría los artículos 3 numeral 8; 393; 195 y 198 de la Constitución de la República.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente consulta de constitucionalidad, en atención a lo previsto en los artículos 428, 429 y 436 numeral 1 de la Constitución de la República, así como de los artículos 141, 142, 143 y 191 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Legitimación activa

Los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se encuentran legitimados para presentar la consulta de constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 428 de la Constitución de la República, artículo 142 segundo inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 4 segundo inciso del Código Orgánico de la Función Judicial.

Determinación del problema jurídico a ser resuelto

La consulta de constitucionalidad elevada a la Corte Constitucional por los jueces de la Tercera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro del proceso N.º 234 –2012 ¿cumple con los parámetros establecidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y las reglas interpretativas dictadas por la Corte Constitucional dentro del control concreto de constitucionalidad?

Para efectos de estructurar la respuesta al problema jurídico planteado, a continuación procedemos a realizar un contraste entre las reglas establecidas para la procedencia de una acción de esta naturaleza, con el requerimiento de consulta de constitucionalidad de norma en análisis.

a) Identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta

La Corte Constitucional estableció como una obligación para los operadores de justicia consultantes, el manifestar en forma clara y concisa el precepto normativo que consideren contradictorio a la Constitución.

En el presente caso, la norma que responde al objeto de la consulta planteada, es el artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.



b) Identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos

En referencia a este particular, la Corte Constitucional especifica que la determinación del o de los preceptos normativos, debe ir acompañada de las reglas o principios constitucionales que se consideren afectados y de las razones que justifiquen la presunta contradicción entre el precepto normativo y la Constitución de la República. Esta justificación tiene por objeto cumplir con la motivación exigida en todos los actos de los poderes públicos, conforme el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución.

En el caso concreto se identifican los artículos 3 numeral 8; 195; 198 y 393 de la Constitución de la República, que se refieren al deber del Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción; a las funciones y atribuciones de la Fiscalía General del Estado y a la seguridad humana, respectivamente. Sin embargo, los argumentos expuestos por los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha –los consultantes– responden a una interpretación legal de los artículos 9 y 70 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ejercicio jurídico que a criterio de los consultantes, evidencia la existencia de elementos jurídicos que pueden ser objeto de interpretaciones y aplicaciones diversas en el ámbito penal.

Es decir, los argumentos expuestos en la consulta realizada por los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha responden a una interpretación legal del Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de la Función judicial, más no se correlacionan con las reglas constitucionales invocadas como afectadas por estas normas.

Por tanto, los jueces consultantes no justifican la forma en que las normas constitucionales invocadas se verían infringidas con la aplicación de la norma consultada, es decir, la forma y justificación por las cuales dicha norma contradice la Constitución; su razonamiento se limita a una interpretación legal de la norma, y la consecuencia, que en su criterio, genera la vigencia de la misma sin explicar motivadamente el presunto conflicto de constitucionalidad.

c) Explicación y fundamentación de la relevancia de la norma puesta en duda

La Corte Constitucional, en relación a este tema mencionó que, adicionalmente, a los elementos antes detallados, los jueces consultantes tienen la obligación de

explicar la relación que tiene el pronunciamiento de constitucionalidad de la norma invocada y su aplicación al caso concreto.

Es decir, no es suficiente mencionar el precepto normativo, los principios y reglas constitucionales que se presumen infringidas por la norma, y los motivos que evidencien la contradicción constitucional; sino también, que las juezas y jueces deben exponer la determinación de cómo la interpretación constitucional de la norma es imprescindible para la toma de decisión, en consideración a la naturaleza misma del proceso y el momento procesal en que se presenta dicha consulta.

En el caso concreto, este supuesto no se evidencia en la consulta planteada, porque como se menciona en el literal **b** no se encuentra establecida la relación entre el artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial y las reglas constitucionales invocadas por los consultantes, lo cual, demuestra la ausencia de razones que justifiquen la necesidad de un pronunciamiento de carácter constitucional. Más bien, la forma en que se realiza esta consulta evidencia la necesidad de un pronunciamiento de carácter legal que es la materia de la litis en el recurso de nulidad.

Siendo así, la consulta responde a un requerimiento de interpretación legal, respecto del artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, necesaria para la resolución del recurso de nulidad planteado, más no evidencia un problema de carácter constitucional que amerite un pronunciamiento de esta Corte.

De todo lo expuesto se concluye que la consulta de constitucionalidad de norma, presentada por los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cumple con lo estipulado en el literal **a** más no ha justificado lo requerido por los literales **b** y **c**, conforme el análisis que antecede.

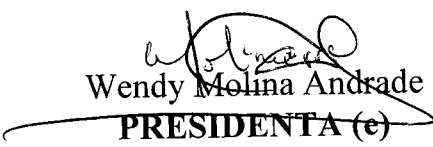
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente:

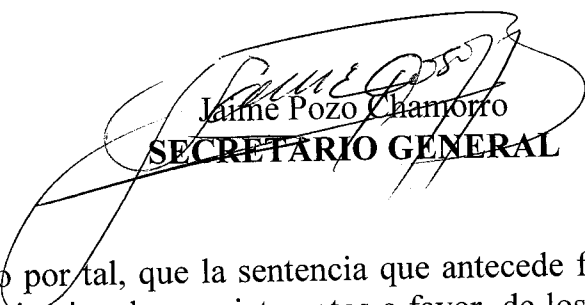
SENTENCIA

1. Negar la consulta de norma planteada.
2. Devolver el expediente a la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para que continúe con la sustanciación de la causa.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.



Wendy Molina Andrade
PRESIDENTA (e)



Jaime Pozo Chamorro
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con siete votos a favor, de los jueces y juezas: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina Andrade, sin contar con la presencia de los jueces Tatiana Ordeñana Sierra y Patricio Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del 30 de mayo de 2013. Lo certifico.



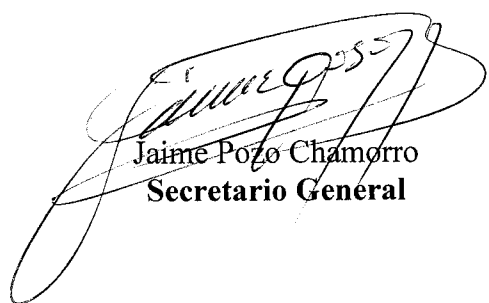
Jaime Pozo Chamorro
SECRETARIO GENERAL



JPCH/msb/mov

CASO No. 0604-12-CN

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por la jueza Wendy Molina Andrade, presidenta (e) de la Corte Constitucional, el día martes 18 de junio de dos mil trece.- Lo certifico.



**Jaime Pozo Chamorro
Secretario General**

JPCH/lcca